JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 57 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1004/2019

Materia: Resolución contractual

Demandante: D./Dña.

PROCURADOR D./Dña.

Demandado: SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A.

PROCURADOR D./Dña.

SENTENCIA Nº 101/2020

En Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.

Vistos por la Ilma. Sra. Doña _____, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid, los presentes autos de juicio Ordinario que con el número 1004/2019, se han seguido en este Juzgado, y en los que han sido parte, como demandante D^o _____, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. _____, y asistido por la Abogada Sra. Rodríguez Picallo, y de otra, y como demandada SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. representada por el Procurador Sr. _____, y defendida por el Abogado Sr. _____, sobre declaración de nulidad,

Se procede, en nombre de S.M. EL REY, a dictar la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda que ha dado origen a los presentes autos en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, y que en aras a la brevedad se dan por reproducidos, terminando con la súplica al Juzgado, que previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia en la que se estime íntegramente la Demanda acordando que:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de “Tarjeta PASS” con nº de contrato _____ y nº de tarjeta _____ suscrito entre las partes el 4 de marzo de 2013, así como del contrato de seguro. Condenando a la entidad demandada a restituir a Don _____ la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia- de la cláusula de intereses

remuneratorios del contrato de “Tarjeta PASS” con n° de contrato _____ y n° de tarjeta _____, suscrito entre las partes el 4 de marzo de 2013, se condene a la entidad demandada a restituirle a Don _____ la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 29 de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda y se acordó dar traslado de la demanda a la entidad demandada, emplazándola a fin de que en el plazo de veinte días contestase a la demanda; y verificado tal emplazamiento, con fecha 14 de enero de 2020 tuvo entrada en este Juzgado escrito presentado por la representación de la demandada oponiéndose a la demanda con base a los hechos y fundamentos de derecho allí consignados, que igualmente se reproducen, finalizando con la súplica al Juzgado que tras dar al procedimiento su pertinente curso legal, en su día, dicte sentencia por la que DESESTIME ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada de contrario, con expresa imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Mediante Diligencia de ordenación de 17 de enero de 2020 se tuvo por contestada la demanda, señalándose para la celebración de Audiencia previa el siguiente 11 de mayo de 2020, a las 12 horas, que se suspendió el referido señalamiento, señalándose nuevamente para su celebración vía telemática, el siguiente 20 de julio de 2020, a las 11,45 horas, la cual celebró con la asistencia de las partes y el resultado que obra en el acta y la grabación practicadas al efecto por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, en la que tras efectuarse las alegaciones oportunas, se recibió el pleito a prueba, proponiéndose y admitiéndose las pruebas propuestas consistentes en documental, quedando a continuación los autos conclusos para dictar Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, a excepción de los plazos previstos para el señalamiento de vistas, debido al cúmulo de asuntos pendientes de tal trámite en este Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es pretensión de la parte actora que se declare que el interés remuneratorio es usurario, y subsidiariamente que se declare que las condiciones generales del contrato que regulan los intereses remuneratorios no superan el control de transparencia, debiendo tenerse por no puestas, con las consecuencias en ambos casos del reintegro por la demandada de cuantas cantidades abonadas excedan de la cantidad dispuesta. Basa tales pretensiones en el hecho de que siendo consumidor, el 4 de marzo de 2013 suscribió con la demandada una solicitud- contrato de tarjeta PASS, mediante modelo normalizado para todos los clientes, concertando con ello un sistema de crédito revolving con un coste mensual del 1,67%, y una TAE de 21,99%, firmándose dicho contrato sin ningún tipo de información sobre lo que suponía el tipo de interés aplicable y las consecuencias económicas de utilizar el pago aplazado, contratando además un seguro mediante la marca en una casilla con una equis. Señala que en la actualidad las tarjetas asociadas a ese contrato se encuentran anuladas y la deuda mantenida con la

demandada es de 0,00 euros. Aduce que es un pequeño ahorrador, con total desconocimiento del mundo financiero, viendo durante la vida del préstamo, como se incrementaba éste con intereses muy altos, y al ser consciente de que estaba sufriendo un perjuicio económico efectuó reclamación a la demandada, solicitando además documentación, que le fue remitida, no accediendo a la nulidad del contrato, ni a la devolución de lo pagado en exceso, comunicándole además que procedían a la anulación de las tarjetas asociadas a dicho expediente. Añade que la demandada se reservó el derecho de modificar las condiciones del contrato, incluido el tipo de interés, provocándole inseguridad. Señala que en el contrato que la remitió la demandada es muy complicado determinar en las condiciones generales del contrato, la TAE aplicada, al ser prácticamente ilegible, e ininteligible, siendo una letra extremadamente pequeña y de mala calidad, y además en el documento se aprecia de forma enmascarada y bajo las firmas, fallando el control de inclusión y el de transparencia, añadiendo que los resúmenes de las operaciones de los periodos que conserva, la TAE todavía es más alta, destacando que en el portal del cliente bancario de la página web del Banco de España, en marzo de 2013, la TAE media en España de los créditos al consumo era de 9,57%, lo que supone más del doble.

La parte demandada se opone a tales pretensiones alegando en síntesis que el actor compara erróneamente la TAE de la tarjeta PASS, que actualmente asciende a 21,99%, con el tipo de interés de crédito al consumo para operaciones a plazo entre 1 y 5 años que en España oscila entre el 8% y el 10%, y con el interés legal del dinero, lo que además contraviene la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo; de modo que considera que ha de compararse con el interés normal de este tipo de operaciones denominadas créditos revolving, que por las características especiales que presentan, se diferencian claramente de las operaciones de crédito al consumo, y según las estadísticas publicadas por el Banco de España por ASNEF, y por los Bancos de los países europeos que nos rodean, el interés remuneratorio aplicado, no puede ser considerado usurario, estimando que la demanda gira sobre la incorrecta interpretación de la Sentencia del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, que es un supuesto diferente al de autos, pues allí dicho Tribunal careció de elementos probatorios que le permitiesen identificar cual era el interés normal para este tipo de operaciones, siendo que en realidad existe un mercado de créditos revolving cuya estadística de tipos de interés ha oscilado entre el 19,7% al máximo del 21,2%. En 2014-, siendo 20,6% la media del periodo analizado, existiendo razones objetivas que justifican que el tipo de interés aplicado a los créditos revolving sea sensiblemente superior al que se aplica a las operaciones de crédito al consumo; poniendo de relieve que en el presente caso, la TAE de la tarjeta es similar a los que ofrecen otras tarjetas de crédito de superficies comerciales, y otras entidades, e incluso es inferior a algunos de ellos; añadiendo que el tipo de interés aplicado trae causa directa del funcionamiento y naturaleza de la tarjeta, y especialmente, de la inmediatez con la que los interesados pueden adquirir una línea de crédito, sin que medie garantía, lo que conlleva un nivel de riesgo de impago superior al de otro tipo de operaciones, por lo que considera que el contrato es conforme a derecho, destacando que transcurridos casi 6 años desde la contratación, durante los mismos el actor no ha manifestado disconformidad alguna con los intereses remuneratorios hasta la reclamación en 2018. Señala que la tarjeta le fue solicitada libremente por el actor, y con pleno conocimiento, siendo emitido para que su uso como medio de pago, poniendo de relieve que en la actualidad la TAE es exactamente la misma que al inicio. Indica que la tarjeta tiene dos modalidades de pago, al contado, con el que no se repercute al usuario ningún tipo de interés, con dos modalidades contado inmediato y contado fin de

mes, donde se liquidan las deudas resultantes de las compras durante el periodo mensual de facturación, mediante adeudo en la cuenta bancaria del cliente el último día hábil de cada mes; y frente a este sistema está el sistema Crédito, que caso de elegirse por el cliente, obliga a abonar a la entidad la cuota mensual pactada; de modo que el actor ha hecho uso continuado de la tarjeta desde 2013, durante casi 6 años, sin disconformidad. Alega que las principales características diferenciales del crédito revolving que lo particulariza del resto de préstamos/créditos al consumo serían que la gestión financiera del crédito revolving es sustancialmente más compleja y exigente para las entidades, ya que tienen que proporcionar una flexibilidad al cliente tanto en el momento de efectuar la disposición del crédito como la posibilidad de devolverlo en cualquier momento; las entidades financieras deben mantener un nivel de recursos propios que cubra tanto la parte dispuesta del crédito, como la potencialmente disponible; se exigen menores garantías, lo que conlleva mayores riesgos de morosidad; las entidades financieras de crédito no pueden mantener depósitos de sus clientes, por lo que deben financiarse en las mismas condiciones que cualquier otra empresa no bancaria, lo que conlleva mayor coste en el precio final del crédito; además dichas entidades tienen un mayor desconocimiento del comportamiento de cobros y pagos de sus clientes. Añade que la propia CNMV diferenciaba los créditos revolving de cualquier otro producto financiero como las tarjetas de débito, de créditos comunes, para empresas y particulares, etc., y no pueden ser incluidos dentro de los créditos al consumo.

SEGUNDO.- Ley de Usura de 1908 en su artículo 1 dispone que: Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, de 7 de abril de 2017, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2012, dijo lo siguiente: “ la ley de represión de la usura se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes, "pacta sunt servanda". (...) De este modo, el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos."

En cuanto la consideración de los intereses pactados como leoninos, debe partirse de la indiscutible distinción entre la naturaleza jurídica de los intereses remuneratorios y la de los moratorios, pues mientras los primeros suponen una contraprestación de la entrega del capital prestado - responden a la productividad del dinero, en tanto retribución del capital prestado-, sin embargo los moratorios cumplen una finalidad indemnizatoria de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual por el prestatario.

Los remuneratorios constituyen parte esencial del contrato ya que suponen el precio pactado entre las partes estando excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE2, y no son susceptibles de ser declarados abusivos, sin perjuicio de su sometimiento al control de transparencia, y de la aplicación la Ley de represión de la

usura de 23 de julio de 1908, pronunciándose en tal sentido la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, así como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª), de 11 marzo de 2015, y la de la Audiencia Provincial de Madrid, (Sección 9ª), de 9 de septiembre de 2014.

Los intereses remuneratorios tienen un indudable origen contractual ya que sólo se devengan si las partes así lo establecen, y su finalidad es evitar la pérdida de valor del importe prestado como consecuencia del transcurso del tiempo previsto para su restitución y retribuir la concesión del préstamo, como negocio propio de quien se dedica a esta actividad de modo profesional, siendo de forzosa previsión, ya que si no hay pacto no son exigibles (art. 1755 CC). Dichos intereses no tienen más limitaciones que las derivadas de la aplicación de los principios generales en materia de obligaciones (art. 1255 CC) o aquéllas que resultan de normas que puedan incidir en la validez de lo pactado, concretamente la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908 que prevé como única sanción la nulidad del contrato de préstamo, con la obligación de la entidad de devolver las cantidades percibidas, y la obligación del prestatario de devolver la totalidad del capital prestado sin intereses.

En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia (Sección 1ª) de 25 de julio de 2017, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que cita en la misma:

“En relación a la consideración o no como intereses usurarios los remuneratorios pactados en un determinado contrato de crédito al consumo, esta Audiencia Provincial tiene declarado en sentencia 10/10/2013 que "si bien en este precepto (art. 1 Ley de Represión de Usura), se habla de " intereses " sin distinción, la opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria entiende que debe distinguirse, por su distinta naturaleza, lo que son intereses de carácter remuneratorio u ordinarios de aquellos que persiguen sancionar la mora o retraso en el cumplimiento de la obligación, es decir los intereses moratorios. Los primeros sirven para retribuir al prestamista por el desembolso que hace del dinero prestado durante el tiempo que media entre dicha entrega y su devolución por parte del prestatario, mientras que los segundos no persiguen sino la indemnización del perjuicio irrogado al prestamista que no recupera el capital prestado en la época y el modo convenido, de manera que presuponen un incumplimiento por parte del prestatario y tienen un carácter de alguna manera sancionadora. Pues bien, una doctrina bastante unánime (seguida por esta Audiencia Provincial, Sentencia 10 de junio de 2005), ha venido sosteniendo la aplicación de la Ley de Represión de la Usura sólo a los primeros y no a los segundos. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, (SS. TS. 19 de mayo de 1995 , 18 de febrero de 1998 , 15 de noviembre de 2000 , 2 de octubre de 2.001), al señalar que cuando se habla de " intereses " en la indicada Ley "se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, y cuando los intereses son moratorios no debe olvidarse que su devengo se produce por una previa conducta del deudor jurídicamente censurable, y que su aplicación sirve tanto para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al obligado cumplimiento voluntario ante la gravedad del perjuicio que le produciría el impago o mora". En definitiva, concluye el Alto Tribunal, los intereses de demora no tienen naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción pecuniaria con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se considere si exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, ni encuadran en la Ley de 23 de Julio de

1.908. Ciertamente, esta doctrina aparece en cierta manera contradicha por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2.002 a cuyo tenor se afirma que "por el hecho de que los pactos sobre intereses de demora, sean permitidos por el Código Civil no escapan a la aplicación de la Ley de 23 de Julio de 1.908 que se refiere en el artículo 1.º a la estipulación de un interés, sin distinguir su clase o naturaleza", si bien se trata de una doctrina que no parece haber tenido continuidad como para sustituir la doctrina tradicional.

Excluida la aplicación de la Ley la Usura de 1908 a los intereses moratorios deberá examinarse si, en el caso concreto, pueden considerarse usurarios los intereses remuneratorios.

A tal fin ha de tenerse en cuenta que "para calificar de usurario el préstamo ha de atenderse al momento de la perfección del contrato, por ser en el que, otorgándose el consentimiento puede estimarse si éste estaba o no viciado, siendo la de ese momento la realidad social que ha de contemplarse y no la vigente cuando se pretende que el contrato tenga efectividad, pues otra cosa implica infracción de los artículos 2.3 y 3.1 CC", (STS. 7 de marzo de 1998). Por otra parte, también ha de tenerse en cuenta que el citado art. 1 de la Ley sobre represión de la Usura de 1908, requiere para que pueda reputarse usurario un préstamo no solo que se haya estipulado "un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulten leoninos", sino que, además, es preciso que existan motivos para estimar que "ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

A mayor abundamiento, y en lo que se refiere a los intereses remuneratorios debe precisarse que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la Ley, esto es, "que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

En este sentido debe recordarse lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que señala que "cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de "unidad" y "sistematización" que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley".

En el mismo sentido y de conformidad también con lo declarado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2013, deberá calificarse de usurario si concurre alguno de los presupuestos fácticos exigibles conforme a lo establecido por el artículo 1 de la Ley de 1 de julio de 1908, sobre préstamos usurarios.

Por otro lado, es cierto que para efectuar el análisis de comparación, el porcentaje que ha de tomarse en consideración, no es el nominal, sino la tasa anual equivalente, que se calcula teniendo en cuenta cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, y que en este caso queda fijada en el 26,70%; pero

también debe tenerse presente que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero", que no cabe confundir con el interés legal del dinero.

En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo arriba citada que indica que "El interés con el que ha de realizarse la comparación es el " normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera " interés normal" puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada" .

Por tanto la cuestión radica no tanto en si es o no excesivo el interés pactado, como si es "notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", siendo que en principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba, la excepcionalidad necesita ser alegada y probada por el prestamista. Como dice la anteriormente citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia:

“El art. 319.3 LEC dispone que "en materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo", lo que determina que ha de respetarse el arbitrio judicial (SSTS. 31 de marzo de 1997 y 10 de mayo de 2000), basándose en criterios más prácticos que jurídicos (STS. 29 de septiembre de 1992), valorando caso por caso (STS. 13 de mayo de 1991), con libertad de apreciación (STS.10 de mayo de 2000), formando libremente su convicción (STS. 1 de febrero de 2002)”

Por otro lado, el carácter usurario de un préstamo conlleva su nulidad, que como tiene dicho el Tribunal Supremo e «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» Sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio, y sus consecuencias son las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, es decir, que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

TERCERO.- Para la resolución de la cuestión controvertida, resulta esencial el criterio del Tribunal Supremo al respecto, concretamente la Sentencia de Pleno de 25 de noviembre de 2015 (Ponente _____), que razonó lo siguiente, en relación al carácter usurario de un crédito concedido a un consumidor:

"1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un "crédito revolving" concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6% TAE. El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura , que establece: «[s]erá

nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales». Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «[l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable. En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley. Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su

inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales». Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de "unidad" y "sistematización" que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito "revolving" que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados. El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia. El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada. En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el

contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito " revolving" no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal. Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito " revolving" en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado."

En este sentido se pronuncia también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, (Sección 11ª), de 29 de junio de 2018:

“Pues bien teniendo en cuenta la doctrina expuesta entendemos que un TAE del 21,94%, incluso del 21% aplicado, es notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

Apreciada la usura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 1908, la obligación del deudor alcanza a la devolución del capital sin otros conceptos, de modo que partiendo de la cantidad financiada de 2.438,94 € (al folio 28), a la que se le restan

los pagos realizados (por 1.700,17 €), la cifra a pagar por el demandado asciende a 931,48 €, con los intereses legales desde la demanda del monitorio que serán los del art. 576 de la L.E.C. desde ésta resolución, lo que supone la estimación en parte de la demanda.

Como recoge la STS de 25 de noviembre de 2015, antes citada: "1.- *El carácter usurario del crédito "revolving" concedido por Banco...al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.*

2.- *Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.*

La falta de formulación de reconvencción impide aplicar la previsión de la segunda parte del precepto, según el cual, si el prestatario hubiera satisfecho parte de la suma percibida como principal y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado".

En el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª) de 14 de octubre de 2019:

"El planteamiento de defensa de la parte demandada en esta alzada no explica las variaciones del tipo de interés apreciados en la Sentencia. Así, en el extracto de movimientos de la tarjeta se indica en el anverso 22% TAE, y en el reverso TIN 24%, sin constar ninguna comunicación al cliente sobre ese cambio, como tampoco del incremento del TIN al 22,78% a partir de abril de 2012, la reducción al 4,89% desde marzo de 2013, el "Coste efectivo remanente" del 25,31% desde noviembre de 2015, o del 24% desde abril de 2018. En definitiva, no sólo no es cierto que el interés remuneratorio sea del 19%, sino que además de ser bastante más elevado del señalado en las condiciones particulares, se modifica unilateralmente por el Banco por razones que ni siquiera se indican al cliente y sin previo aviso. Este factor de disponibilidad unilateral de una de las condiciones más importantes del contrato, aunque ciertamente el actual artículo 33 RDL 19/2018, y anteriormente el 22 L 16/2009, autorizan la modificación cuando se haya acordado en el contrato marco, ha de tenerse en cuenta a efectos de valorar el carácter usurario del crédito, pues al permitirse el Banco aumentar el coste de la financiación puede ocasionar que un interés inicialmente adecuado a las circunstancias del caso, termine por no serlo agravando aún más el grado de reproche al no haber podido participar el cliente en su concreción. Además, en la cláusula 13.2 del propio contrato, el Banco se reserva la facultad de modificar unilateralmente el interés, sin obligarse a comunicarlo al cliente, contrariamente a como en la estipulación 13.1 se autoimpone respecto a las demás condiciones del negocio.

Estas consideraciones se hacen con la vista puesta en la Doctrina del Tribunal Supremo. Dijo así el Alto Tribunal en la Sentencia 628/2015:

"En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es "notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ", y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de

los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como "notablemente superior al normal del dinero".

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico."

No se trata, pues, de comparar el interés fijado en el contrato con el de otras Entidades para operaciones similares, sino con los habituales en operaciones de crédito al consumo, como hizo la Sentencia apelada. Se constata además, como ya hemos explicado en otras ocasiones para este mismo tipo de contratos (Sentencia dictada por esta Sección 25ª en Recurso de apelación 13/2019), que el aplicado por la demandada se sitúa en más del triple. Es evidente que el crédito resultante de las compras realizadas con una tarjeta de crédito con pago aplazado es un préstamo al consumo concedido en condiciones de normalidad precisamente por tratarse de un negocio habitual. Es más, para el cliente que opera con la tarjeta no resulta fácil conocer cuál es el coste económico real, y menos cuando se modifica durante la vida del negocio, pues no se refleja en los datos particulares del contrato, sino en un condicionado general de engorrosa y difícil lectura predispuesto para las diferentes modalidades de contratación ofrecidos al cliente. No consta, pues, que el interés, y sobre todo la facultad de aumentarlo unilateralmente, se impusiera para cubrir un mayor riesgo de impago por las particulares condiciones del cliente, ni por otra circunstancia que objetivamente justificase que para ese tipo de crédito al consumo la acreedora impusiera un interés remuneratorio tan por encima del normal."

Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) de 30 de septiembre de 2019:

“Como ya señalamos en nuestra sentencia de de 4 de diciembre de 2017, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 declara (rec. 2341/2013) en la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control sobre abusividad del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato y declara " la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito "sustancialmente equivalente " al préstamo. En dicha sentencia se establece que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, Legislación citada CC art. 1 es, "que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales". También señala la sentencia que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés "normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia". "Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)". "Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ".

Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto de controversia en numerosas sentencias, como en la de 25 de abril de 2018 y la más reciente de fecha 28 de junio de 2019 , en la que ya indicamos que "la consecuencia práctica última de esta nulidad, al haberse estipulado "un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso" (artículo 1.º de la citada Ley de 23 de julio de 1908), como ocurre en este asunto, no es otra que la obligación de "entregar tan solo la suma recibida" (artículo 3.º del mismo texto legal.)" En el caso que nos ocupa, el interés remuneratorio es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado; como indica la parte demandante recurrente, estamos ante un crédito al consumo que fija un interés remuneratorio del 26'82% TAE y en el año 2008, fecha de la firma del contrato, el interés legal del dinero estaba en el 5,50%, lo que supera el límite del artículo 19-4 de la Ley 7/1995 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo , que establece que " *En ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero*".

En el contrato objeto del pleito se pacta un interés remuneratorio que supera en más de cinco veces el legal del dinero. Debe estimarse el recurso y aplicar el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido solicitado por la demanda, por cuanto en dicho precepto se establece que "*Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera*

satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado".

En atención a los argumentos expuestos, procede que revoquemos la sentencia de instancia por declarar la Sala que el préstamo en cuestión es usurario, con las matizaciones que realizaremos a continuación.”

Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª), de 18 de julio de 2019:

“ Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión debatida en esta alzada procede dejar previamente establecido que por Dª Julieta se interpuso demanda de juicio ordinario solicitando como petición principal la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito concertado el 22 de octubre de 2004 con Citybank España (absorbida por Banco Popular E , denominado Wizink Bank SA posteriormente) al considerar usurario el mismo , efectuando de forma subsidiaria la petición de ser declarada nulidad de la cláusula referida a los intereses remuneratorios de dicho contrato por falta de transparencia e incorporación.

Igualmente es de señalar que la nulidad por préstamo usurario se fundamenta en que el Banco de España, establecía, como TAE media aplicada a las operaciones de crédito al consumo para octubre del año 2004 el de un 8,37 % , cuando el contrato objeto de autos fijaba un TAE del 24,71 % para compras con la tarjeta, y del 26,82% para retirada de efectivo.

Así declarando la sentencia de instancia la nulidad por usurario del préstamo atendiendo a los razonamientos de la sentencia del TS de 25.11.2015 (reproducidos en otra sentencia que se cita), esto es, estando en definitiva a los tipos de interés medios publicados por el Banco de España, para el año de emisión de la tarjeta, *de operaciones de crédito al consumo* aplicados por entidades de crédito , la parte ahora apelante vuelve a incidir en que para considerar que nos encontramos ante un interés notoriamente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado según las circunstancias del caso -como exige la Ley de Represión de la Usura- se debe de estar, al no existir para dicho año 2004 las tablas que desde el 2010 publica el Banco de España sobre los tipos de interés aplicados a créditos mediante las tarjetas de crédito, a los publicados por el Centro de Estudios al Consumo para créditos con tarjeta para marzo de 2002, reproduciendo un cuadro en el que se aprecian tipos que van desde el 8,71% al 25,34 %.

Sentado lo anterior, como ya esta Sala señaló en sentencia de 14 de junio pasado, se es consciente de la existencia de resoluciones de los tribunales que para valorar si el préstamo es o no usurario consideran que debe de estarse al tipo de interés correspondiente a los créditos al consumo que publica el Banco de España, otras consideran que debe de estarse a los índices medios de tipos de interés que desde hace algunos años publica el Banco de España referidos a préstamos y créditos mediante tarjetas de crédito aplazado.

En el caso de autos, lo cierto es que tratándose de una tarjeta de crédito producto de un contrato de octubre de 2004 , año para el que no existen esos datos publicados por el Banco de España respecto a dichos tipos medios aplicados a las tarjetas de crédito, parece ajustado a derecho el estarse, para la valoración de si el crédito es usurario o no, a los índices referido al créditos al consumo publicados por el Banco de España para ese año, como se razona en la demanda y se viene a considerar en la sentencia apelada al reproducir lo razonado en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 (en la que, aunque sea ocioso recordar, está los índices publicados por el Banco de España para créditos al Consumo en el año 2011), cuando, como ya se ha señalado, para

dicho año, aun no existían publicados por el Banco de España los índices de tipos medios de TAE para operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito .

Si bien la apelante, ya al contestar a la demanda hizo referencia a unos índices publicados por el Instituto de Crédito al Consumo, lo cierto es que en modo alguno cabría estar a los mismos considerándolos de igual solvencia que la que se otorga a los publicados por el Banco de España, de carácter oficial, tratándose de estadísticas que publica el Banco de España ante la información mensual que le facilitan las entidades de crédito, obligación con origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (así, Rglto. BCE de 20.12.2001, Circular 4/2002 del Banco de España). A lo que además cabría añadir que los que se pretende aplicar se refieren a marzo de 2002, esto es, dos años y medio antes de la fecha en la que se contrató la tarjeta objeto de autos, siendo de fácil conocimiento que en aquellas fechas las operaciones de crédito tenían unos tipos más altos que en octubre de 2004.

CUARTO.- De cualquier forma, soslayando las consideraciones anteriores, aun tomando como referencia los tipos medios de préstamos personales y aplazamiento con tarjeta publicados por el Instituto de Crédito al Consumo para el año 2002 (marzo), del cuadro que se ofrece por la ahora apelante se revela una media de tales tipos de interés de un 16.88 % TAE , siendo incluso de destacar que los tipos de TAE aplicados a la tarjeta objeto de autos -24,71% , 26,82 %- superan, en mucho, tal media sino también incluso, en orden al tipo aplicado para retirada de efectivo con la tarjeta objeto de autos, el tipo más alto de tal cuadro (de 25,34%, superando solo 5 de las veinte entidades tomadas en consideración el 22% al que se refiere la demandada al contestar a la demanda).

Es decir, en todo caso también nos encontraríamos ante unos tipos de TAE notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados las circunstancias del caso, máxime sin señalarse motivo singular que justificase la aplicación de tales tipos de interés.

Por ello, en todo caso, también se ajustaría a derecho la consideración de préstamo usurario que se efectúa en la sentencia apelada.”

O la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) de 28 de junio de 2019:

“Por la representación de WIZINK BANK SA se interpone recurso de apelación con base en el único motivo de error en la valoración de la prueba. Según el recurso tiene que hacerse la comparativa con la estadística del Banco de España respecto de los tipos de interés ordinarios de los contratos de tarjeta con pago aplazado, que reconoce era inexistente para el año 2006. Niega que el tipo de interés fijado en el contrato sea notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso, porque era el que se aplicaba por las entidades bancarias, que oscilaba entre el 1% al 2% mensual.

Como ya señalamos en nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2017 , la anteriormente referida STS de 25 de noviembre de 2015(rec. 2341/2013)La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control sobre abusividad del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato. declara " la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código CivilLegislación citada que se aplicaReal Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica elCódigo Civil. art. 1255 (16/08/1889) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito "sustancialmente equivalente " al préstamo. En dicha sentencia se establece que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la

ley, esto es, "que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales". También señala la sentencia que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés "normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia". "Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)". "Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ".

Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión objeto de controversia en numerosas sentencias, como en la reciente de 25 de abril de 2018, en la que ya indicamos que "la consecuencia práctica última de esta nulidad, al haberse estipulado "un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso" (artículo 1.º de la citada Ley de 23 de julio de 1908), como ocurre en este asunto, no es otra que la obligación de "entregar tan solo la suma recibida" (artículo 3.º del mismo texto legal)". En el presente caso, el interés remuneratorio es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado, como indica la propia sentencia apelada, estamos ante un crédito al consumo que fija un interés remuneratorio del 26'82% TAE y en el año 2006, fecha de la firma del contrato, el interés legal del dinero estaba en el 4%, lo que supera el límite del artículo 19-4 de la Ley 7/1995 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, que establece que "En ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero", en el contrato objeto del pleito se pacta un interés remuneratorio que supera en más de cinco veces el legal del dinero. Debe estimarse el recurso y aplicar el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido solicitado por la demanda, por cuanto en dicho precepto se establece que "Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado". El motivo del recurso debe desestimarse."

En el presente caso el contrato se formalizó el 4 de marzo de 2013, con un TAE del 21,99 %, y sin embargo la media histórica de la TAE de los créditos al consumo desde que se publica por el Banco de España –desde 2003- es del 9,067%; y asimismo la tasa media ponderada desde que se tienen estadísticas del Banco de España, en el apartado específico en las tablas del Banco de España para las tarjetas de crédito y tarjetas revolving, es de alrededor de un 20,00%, lo que lleva a concluir que el interés aplicado en el contrato que nos ocupa tiene la consideración de usurario, pues al partir ya de un interés medio muy alto, lo que se aleje de esa cifra, debe considerarse usurario, y ello además al no haberse acreditado por la demandada la concurrencia de circunstancias excepcionales que aconsejaran la fijación de dicho tipo de interés, prueba que conforme a lo expuesto le competía a la entidad demandada.

En todo caso la cuestión ha quedado resuelta por la Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 149/2020, de 4 de marzo, recurso 4813/2019, que ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la entidad aquí demandada, contra la Sentencia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito mediante tarjeta revolving, y ello al considerar usurario el interés remuneratorio, fijado inicialmente en el 26,82% TAE, y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda. Dicha Sentencia ha considerado que la referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, y concretamente en el caso allí analizado, al igual que en el caso que aquí nos ocupa, será el aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. Partiendo de lo anterior, continúa la Sentencia diciendo que en la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario, se tiene en cuenta que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado, y por ello, una diferencia tan apreciable como la que allí concurría, ha de considerarse como notablemente superior a dicho índice. Todo ello tomando en cuenta las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, particulares que no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en el que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar interés remuneratorio, y las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente, pero se alargan considerablemente en el tiempo, pudiéndole convertir en “deudor cautivo”. Finalmente la Sala razona en dicha Sentencia que no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Lo anterior determina, que proceda acoger la pretensión principal de la demanda, y por ende los efectos imperativos del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, que el préstamo se liquidará en ejecución conforme al artículo 3 de la Ley 1908, debiendo devolver el prestatario tan solo el capital recibido con restitución a su favor, -en su caso- del exceso indebidamente percibido por el prestamista, con los intereses correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda.

Por lo que se refiere al contrato de seguro cuya nulidad se insta también en la demanda, al ser un contrato accesorio y vinculado al contrato de tarjeta de crédito cuya nulidad se declara, procede acceder igualmente a su nulidad. Se incide especialmente en la vinculación funcional que debe predicarse entre el contrato de tarjeta de crédito y el de seguro, toda vez que tal interdependencia resulta con nitidez del tenor literal del contrato adjuntado en el documento número 3 de la demanda.

Premisas que permiten incardinar dicho entramado contractual en la órbita de los contratos vinculados de consumo, modalidad comercial regulada inicialmente en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (LCC) -que había traspuesto al Derecho nacional la Directiva 87/102/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo-, sustituidos en la actualidad por los artículos 23, 26 y 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC), en vigor a partir del 25 de

septiembre de ese año y que supuso, a su vez, la trasposición al derecho interno de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo.

Así, es altamente revelador del significado de aquella vinculación que el propio legislador defina los contratos vinculados de venta de bienes y de financiación, desde un punto de vista objetivo, como una "unidad comercial" (artículo 29.1 LCCC), de lo que extrae una doble consecuencia: a) la eficacia del contrato principal de consumo se supedita a la efectiva obtención del préstamo, hasta el punto de que el artículo 14.1 LCC prohíbe una cláusula que permitiera exigir el pago al contado al consumidor "para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación previsto"; y b) la ineficacia sobrevenida del contrato principal -así, por razón de nulidad, desistimiento del consumidor, resolución de mutuo acuerdo o por incumplimiento grave del vendedor-determina asimismo "la ineficacia del contrato expresamente destinado a su financiación" (artículo 14.2 LCC).

Como se apunta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016, la Directiva 87/102 /CEE perseguía la finalidad de permitir al consumidor adquirente de un bien o servicio oponer frente al financiador las vicisitudes del contrato concertado con el proveedor del bien o servicio, siempre que financiador y proveedor tuvieran una relación de financiación exclusiva, sin que la distinta personalidad jurídica del financiador respecto del proveedor permitiera a dicho financiador oponer frente al consumidor su "ajenidad" a las incidencias del contrato entre proveedor y consumidor, puesto que, de acuerdo con los considerandos de la directiva, "en lo que se refiere a los bienes o servicios que el consumidor adquiriera en el marco de un acuerdo de crédito, el consumidor, al menos en las circunstancias que posteriormente se definen, debería tener respecto del prestamista derechos adicionales en relación con los que normalmente tendría contra él y contra el proveedor de los bienes o servicios".

Tales criterios son perfectamente predicables en el presente caso respecto al contrato de seguro vinculado al de tarjeta de crédito, por lo que la nulidad de este último conlleva la nulidad del de seguro, máxime cuando dicha vinculación no ha sido objeto de controversia por la parte demandada.

Todo lo anterior determina la estimación íntegra de la pretensión principal de la demanda.

CUARTO.- En relación a las costas procesales, el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su número 1º el principio del vencimiento objetivo, por lo que procede su imposición a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. en nombre y representación de Dº
contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A.
representada por el Procurador Sr. Sastre Botella, debo DECLARAR y DECLARO
usuario el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes, de modo que el
préstamo se liquidará en ejecución conforme al artículo 3 de la Ley 1908, debiendo
devolver el prestatario tan solo el capital recibido con restitución a su favor, -en su caso-

del exceso indebidamente percibido por el prestamista, incluyendo intereses desde la fecha de interposición de la demanda, declarando asimismo la nulidad del contrato de seguro vinculado al mismo, con los efectos inherentes de recíproca restitución. Se imponen las costas procesales a la parte demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 50 euros, en la cuenta de este Órgano.

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarse en la cuenta número IBAN 4, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 57 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Llévese la presente resolución al libro de Sentencias del Juzgado quedando testimoniada en las presentes actuaciones y tómesese oportuna nota en los libros de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia a cuya publicación en forma, se procederá, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de la fecha por la Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando en Audiencia Pública y presente yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.